

Susanne Jonas
**Revolución
e intervención en
Centroamérica**

INTRODUCCIÓN

Presentamos un esfuerzo preliminar por reconstruir la historia de dos décadas de lucha de clases entre la clase dominante estadounidense y el pueblo centroamericano (principalmente Guatemala, Nicaragua y El Salvador). Nuestro objetivo es comprender los movimientos políticos de Centroamérica y la política de Estados Unidos con respecto a las grandes transformaciones *estructurales* en la economía mundial capitalista y en el equilibrio mundial de fuerzas. Así, intentaremos tomar en cuenta los siguientes factores generales:

1] La lucha antimperialista siempre está condicionada por una continua lucha de clases, en Centroamérica y en Estados Unidos. Un análisis de clase necesariamente va más allá de simples formulaciones antimperialistas y plantea cuestiones más profundas para el movimiento obrero tanto en Estados Unidos como en Centroamérica.

2] Las acciones de Estados Unidos en Centroamérica siempre están condicionadas por el equilibrio mundial de poder entre el Occidente capitalista y el bloque socialista, por sus manifestaciones en la Guerra Fría o la distensión y por el ascenso y descenso de la hegemonía estadounidense.

3] Debajo de transformaciones particulares en Estados Unidos y en Centroamérica subyace una subestructura de movimientos, disrupciones y reajustes en la economía capitalista internacional o *transnacional*. En primer término, la crisis capitalista mundial está dando lugar a una reestructuración de la división internacional del trabajo. De igual importancia, el mundo mismo se vuelve más transnacional: las operaciones del capital se han vuelto más transnacionales, y el terreno de la lucha entre el capital y los explotados se ha globalizado.

4] Como consecuencia de lo anterior, ya no es posible considerar a Centroamérica simplemente en términos de los intereses nacionales estadounidenses: el capital transnacional es capaz de funcionar de manera independiente, si bien en coordinación con el gobierno de Estados Unidos.

5] Como consecuencia de ello, la política estadounidense hacia Centroamérica en un momento dado

no puede reducirse a simples deseos por parte de uno u otro gobierno. Los grandes giros en la política estadounidense han sido, de manera general, expresiones *bipartidarias* de la respuesta de una clase dominante a las condiciones cambiantes. Sin duda, hay diferentes fracciones de la clase dominante estadounidense cuyos intereses particulares difieren en situaciones particulares; pero, *a la larga*, la política estadounidense refleja *intereses de clase* de la clase dominante en Estados Unidos en su conjunto.

6] En virtud de los cambios en la economía mundial, la interrelación entre el movimiento obrero estadounidense y las luchas en Centroamérica no es simplemente una cuestión de apoyo moral del primero a estas últimas, sino que se basa en factores históricos y económicos objetivos.

LA ESTRATEGIA DEL CAPITALISMO AUSTERO

Durante los años sesenta, la estrategia del gobierno estadounidense y la del capital internacional en Centroamérica se orientó hacia la integración económica regional. Al menos en su concepción original, el MCCA (Mercado Común Centroamericano) tenía que ser reformista: fue planeado para incrementar y racionalizar la producción industrial *del mercado centroamericano*, el cual presuponía un mercado consumidor creciente. Esto, a su vez, exigía una mejora en los niveles de vida de la mayoría de la población y una incorporación de la clase trabajadora a la economía.

Pero a finales de los sesenta y principios de los setenta, el fracaso total de este modelo era claro. Ni el gobierno estadounidense ni el capital internacional .ni la burguesía local centroamericana- estaban dispuestos a hacer ninguna de las reformas requeridas para convertir a las clases trabajadoras de Centroamérica en un mercado consumidor de tamaño aceptable. Por el contrario, el capital internacional, junto con el gobierno estadounidense, sabotó y debilitó las pocas estructuras reformistas del MCCA, con el fin de permitir ganancias corporativas máximas.

A finales de los sesenta, el capital internacional, junto con el gobierno de Estados Unidos, trazó de manera fría y deliberada una estrategia para Centroamérica, *basada en el supuesto de que no se haría ninguna reforma*: ni reforma agraria, ni reforma fiscal, ni redistribución de la riqueza, y tampoco producción industrial para un mercado consumidor centroamericano. En suma, la nueva estrategia se basaba en el supuesto de que la clase trabajadora centroamericana (tanto rural como urbana) se mantendría en un mero nivel de subsistencia. Así, se trataba flagrantemente de una estrategia antirreformista, una estrategia de *austeridad forzada*. Esta estrategia sigue vigente en la actualidad.

El hecho de que se trataba de una estrategia del gobierno estadounidense se comprueba examinando

los préstamos de ayuda de Estados Unidos, que estaban orientados ya no hacia el fomento de la producción industrial para el mercado centroamericano, sino más bien hacia el estímulo de exportaciones de Centroamérica. Esta estrategia estaba al servicio de los intereses de un sector del capital extranjero (principalmente de Estados Unidos), que vio en Centroamérica una oportunidad de utilizar el recurso de mano de obra barata para enriquecerse de la noche a la mañana. Estos capitales extranjeros, junto con sus socios locales, convirtieron a las economías centroamericanas en productoras de exportaciones agrícolas “no-tradicionales” (esto es, distintas de café, plátano, azúcar), de ganado, turismo (incluyendo casinos), minería extractiva. También promovieron un nuevo tipo de industria: las empresas *golondrinas* [*runaway shops*] que producen para exportar a otros mercados.

La nueva estrategia no era *simplemente* un plan o un complot para obtener ganancias más altas sin reformas en Centroamérica, sino también una respuesta del capital internacional a la crisis mundial capitalista que empezó a finales de los sesenta. Esta crisis en la acumulación capitalista mundial se manifiesta en primer lugar como una crisis en las economías nacionales de los países capitalistas avanzados; está relacionada con y afectada por (aunque no sólo consiste en) el relativo descenso del imperialismo estadounidense post-Vietnam; esto es, el fin de la hegemonía de Estados Unidos después de la segunda guerra mundial sobre las otras potencias capitalistas centrales.

La crisis general en el curso de la acumulación de capital se volvió evidente hacia fines de los sesenta, cuando empezó a tambalearse el largo boom de la posguerra; esto es, cuando empezó a decaer la tasa de ganancia en los principales países industrializados y las oportunidades de inversión lucrativa que utilizan la tecnología existente empezaron a contraerse. Tales tendencias hicieron surgir una recesión alrededor de 1973-75, la más seria desde la Gran Depresión de los treinta. Esta crisis es el resultado de fuerzas que han estado funcionando por más de veinticinco años y es, en parte, la consecuencia de las propias medidas planeadas para “salvar” el capitalismo mundial en los años treinta.

Primero en los países periféricos bajo la dominación capitalista occidental y más tarde en Estados Unidos y en los otros países capitalistas centrales, esta crisis marcó un cambio de lo que de manera heurística podríamos llamar “capitalismo próspero” a un “capitalismo austero”. En la periferia, el capitalismo austero ha significado una intensificación del grado previo de explotación por parte del capital extranjero; esta ha significado un descenso de los niveles reales de vida de las masas, un aumento del desempleo –que muchas veces alcanza treinta o cuarenta por ciento de la fuerza de trabajo-, y un acrecentamiento de la pobreza, de la desnutrición e incluso de la inanición.

En los países industriales tradicionales o centrales, el cambio del capitalismo próspero al austero es más dramático. Durante el periodo de expansión, la clase dominante estadounidense (notablemente desde 1945 hasta mediados de los sesenta) pudo permitirse hacer concesiones a la clase obrera estadounidense, consolidando el poder de una dirección sindical colaboracionista y comprando literalmente la paz laboral. Esto ya no es posible en una época de crisis capitalista y de contracción que se manifiestan, por ejemplo, en el crecimiento del desempleo, más quiebras y fusiones, reducciones en la producción y en el aprovechamiento de la capacidad instalada, una tasa decreciente de inversiones y la combinación de estancamientos e inflación llamada “estagflación”. La clase dominante ya no puede darse el lujo de “comprar” a la clase obrera estadounidense y recurre a prácticas más abiertamente explotadoras y regresivas. Un ejemplo muy obvio es la política de gestionar de manera deliberada un *mayor* desempleo para bajar salarios y mantener los niveles de ganancia: lo contrario de la política del New Deal para disminuir el desempleo.

En un periodo de crisis general de acumulación para resolver sus problemas el capital tiene que hacer muchos reajustes y modificaciones. Nos referimos a este proceso de ajuste como la reestructuración de la división internacional del trabajo, en este caso una transformación de la división internacional del trabajo existente después de la segunda guerra mundial. La división clásica del trabajo podría expresarse mejor con la imagen ciudad/campo (industria/agricultura). De manera específica, esto implica una “división del trabajo” entre los países (centrales) industrializados que producen bienes de capital y de consumo y los países (periféricos y semiperiféricos) subdesarrollados incorporados a la economía mundial capitalista como proveedores de materias primas y productos agrícolas.

Si la división clásica del trabajo establecida por Marx se expresa en la dicotomía ciudad/campo, la división del trabajo que surge es entre aquellos procesos altamente intensivos en mano de obra, los cuales pueden subdividirse y reducirse a los procesos más simples y taylorizados (que pueden ser realizados por mano de obra no calificada, subvaluada), y aquellos otros que no pueden reducirse de este modo, que son intensivos en capital, que requieren más destreza y entrenamiento.

La expresión más visible de este giro es el desplazamiento de la industria (empresas *golondrinas*) de los países industrializados “centrales”, para aprovechar en los países periféricos una reserva casi ilimitada de mano de obra barata. La “nueva industria” en los países del Tercer Mundo produce casi de manera exclusiva para el mercado mundial.

El extremo máximo de las operaciones *golondrina* son las zonas francas, enclaves en los que el

gobierno local ofrece incentivos especiales con el fin de que corporaciones extranjeras establezcan allí aquella parte de su producción que requiere grandes cantidades de mano de obra barata, no sindicalizada. Las compañías importan materias primas libres de impuestos al país anfitrión, las “transforman” allí en operaciones de montaje intensivas en mano de obra y luego las reexportan para su venta en el mercado mundial. El gobierno local proporciona instalaciones especiales, privilegios y subsidios, fundamentalmente exención de impuestos y aranceles y remesas ilimitadas de ganancias.

En tanto que la producción con estas facilidades es casi de manera exclusiva para el mercado mundial y totalmente ajustada a las necesidades de operación de la corporación matriz con base en Estados Unidos (o Alemania o Japón), estas operaciones casi no contribuyen a la economía local. Sin embargo, debido a que la burguesía internacional ha promovido esta estrategia y en virtud de que los gobiernos de derecha en las naciones periféricas suponen que ésta es la única manera posible de crear empleos, controlar e descontento y por lo tanto mantenerse en el poder, tales gobiernos están compitiendo ferozmente entre sí, cada uno bregando por ofrecer los sueldos más bajos y los incentivos más amplios a las corporaciones extranjeras.

La contrapartida política de esta estrategia es la represión: el fascismo del Tercer Mundo. Las zonas francas tienen sus propias leyes represivas (por ejemplo, la prohibición de las disputas laborales), y muchas veces se encuentran separadas del resto del país por medio de un alambrado o de bardas de concreto. De modo más general, a nivel nacional se requiere de un alto grado de control y represión para mantener y atraer capital extranjero a estos enclaves.

En la periferia y semiperiferia, sociedades enteras están asumiendo el carácter de refugiados de mano de obra barata. Este patrón no se limita a la producción industrial *golondrina*; produce los mismos efectos la reorganización de la economía para girar alrededor de nuevas formas de agricultura de exportación, minería extractiva, etcétera. La clave está en que los productores en estos países no están destinados a ser los consumidores de lo que producen (en contraste con el modelo de industrialización vía sustitución de importaciones), y son consumidores en escala decreciente.

Estos fenómenos pueden observarse hoy día de manera más clara en El Salvador, donde las contradicciones están muy cerca de la superficie. Una población de 4.2 millones de personas se encuentra apiñada en 12 800 kilómetros cuadrados, lo cual significa 525 personas 1.6 km² (y una densidad mayor en la capital). La población crece casi al 4% por año. El uno por ciento de la población es propietaria del 40% de la tierra aprovechable del país mientras que el 41% de las familias no posee tierra en absoluto; 45% de la población está desempleada o subempleada. Y a

aquellos que sí tienen trabajo se les mantiene cerca de los niveles salariales más bajos del mundo: el salario mínimo en El Salvador es de treinta centavos de dólar por hora; menos de dos y medio dólares al día.

La estrategia de zona franca en El Salvador está planeada para sacar provecho de esta tasa salarial increíblemente baja, generalmente alrededor de una décima parte de lo que ganan los obreros estadounidenses en trabajos equivalentes. Un “experto” estadounidense en empresas *golondrinas* y zonas francas afirmó que “El Salvador [...] puede competir [por estas inversiones] *en virtud de sus bajos salarios*”. El gobierno salvadoreño también ha intentado mantener no sindicalizada a la clase obrera y, especialmente en las industrias *golondrinas*, ha reprimido las tentativas de organización de los trabajadores.

Otros gobiernos centroamericanos intentan copiar las zonas francas de El Salvador, pero esta estrategia no puede proporcionar trabajos decentes para los trabajadores salvadoreños, como lo muestra la experiencia de las industrias fronterizas mexicanas (otro programa de empresas *golondrinas*). En efecto, la frontera mexicana se ha ido moviendo hacia el sur, a Centroamérica y el Caribe, donde los gobiernos ofrecen más incentivos y exenciones de impuestos, donde la mano de obra es más barata y menos organizada y donde las condiciones de vida son peores. La experiencia mexicana muestra que, a la primera señal de salarios más altos o derechos laborales, el capital internacional –que ha desarrollado la tecnología para abrir y cerrar plantas con enorme facilidad– se traslada a países más represivos y más explotados.

Además, esta forma de industrialización no es una solución para los problemas de desempleo en un país como El Salvador. Proporciona trabajos de mera subsistencia a una pequeña fracción de la fuerza de trabajo, mientras que la gran mayoría de los desempleados no mejora nada. Tampoco establece una base productiva orientada hacia las necesidades de la población. De hecho, si los obreros salvadoreños fuesen empleados en la producción de bienes para el mercado doméstico, se les tendría que pagar lo suficiente para comprar estos bienes. Pero con treinta centavos de dólar por hora, la mayoría de los obreros apenas si puede alimentar a sus familias. En efecto, El Salvador se ha convertido en una especie de estación de servicio en el sistema capitalista internacional.

La situación de El Salvador y de todo el sistema de empresas *golondrinas* y “zonas francas” tiene efectos profundos para los obreros de Estados Unidos: *su propósito y efecto es el de disciplinar tanto a los obreros estadounidenses como a los salvadoreños*. En primer lugar, cuando las compañías estadounidenses huyen en busca de mano de obra más barata en el extranjero, dejan atrás una masa de

obreros desempleados en Estados Unidos. En segundo lugar, aun cuando los obreros en Estados Unidos estén mejor pagados que los obreros salvadoreños, sus salarios y derechos legales están constantemente amenazados por la existencia de refugios de salarios bajos como El Salvador: cuando se enfrentan con huelgas o demandas de sus obreros, estas corporaciones siempre pueden mudarse al extranjero, o utilizar la *amenaza* de huir para disciplinar a los obreros estadounidenses y forzarlos a aceptar verdaderos cortes salariales, condiciones de trabajo más duras, aumento de producción sin aumento de salarios o trasgresión de sus derechos.

La contrapartida de las empresas *golondrinas*, la otra cara de la cambiante división internacional del trabajo, es la importación de obreros salvadoreños mal pagados a Estados Unidos: la nueva ola de inmigración. Lo que sigue es un esbozo de los rasgos generales del proceso.

En la actualidad, Centroamérica está experimentando una rápida *proletarización*, como resultado de la acrecentada penetración del campo (principalmente por capital extranjero). Se trata de un proceso extremadamente brutal, puesto que ocasiona el despojo de tierras a los campesinos y la conversión de éstos en clase obrera. Algunos se ven forzados a trabajar para los nuevos terratenientes en lo que alguna vez fue su propia tierra, la cual se concentra ahora en plantaciones cada vez más grandes. Pero un número creciente se va forzado a abandonar la tierra por completo y emigrar a las ciudades centroamericanas en busca de trabajo. Sin embargo, en tanto que el desarrollo dependiente capitalista/imperialista en las ciudades genera trabajo sólo para un pequeño porcentaje de ellos o terminan en las ciudades perdidas, marginados y sin trabajo, o son empujados fuera del país –muchas veces sin documentos de inmigración- en busca de un trabajo, cualquier trabajo, sin importar lo mal pagado que esté.

A pesar de que la mayor parte de los trabajadores indocumentados de Estados Unidos son mexicanos, el flujo de centroamericanos ha crecido de manera dramática en los últimos años. Se encuentran concentrados principalmente en California, aun cuando también los hay por todo el país en ciudades como Washington, D. C. Sólo en Washington, a fines de los setenta se calcularon aproximadamente diez mil salvadoreños “ilegales” (indocumentados) y los salvadoreños representaban el 25% de los “extranjeros ilegales” ahí aprehendidos.

Esta ola migratoria centroamericana a Estados Unidos a fines de los setenta y después, es un resultado directo de los fracasos del MCCA y del intento de desarrollo industrial en Centroamérica en los sesenta. Además, éstos son algunos de los centroamericanos a los que *no* se les ha dado trabajo en las zonas francas y empresas *golondrinas* de la región. Estos trabajadores centroamericanos han sido

desplazados y literalmente sacados por la fuerza de su país, más que incorporados a la economía. Una vez en Estados Unidos, su suerte ciertamente no es mejor: como “ilegales” deben aceptar los trabajos más degradantes y peor pagados; o permanecen sin empleo, engrosando las filas de los desempleados en Estados Unidos.

Lo que aparece como un ataque en contra de los trabajadores indocumentados en Estados Unidos de hecho forma parte de la agresión más amplia en contra de toda la clase obrera estadounidense, parte de una estrategia que consiste en disminuir los niveles salariales y debilitar a toda la clase estimulando las divisiones en su interior. Al mantener a los trabajadores indocumentados como un ejército de reserva sin límites, para ser absorbidos por o expulsados de la fuerza de trabajo de Estados Unidos a voluntad, en virtud de su estatuto políticamente “ilegal”, la burguesía puede utilizarlos para disminuir los niveles salariales de toda la fuerza de trabajo estadounidense.

Las empresas *golondrinas* y las “zonas francas” en El Salvador muestran claramente que el capital internacional considera a Centroamérica primordialmente como una fuente de mano de obra barata. Pero éste no es de ninguna manera el único ejemplo. En Guatemala, la institucionalización de políticas de austeridad adquirió una forma algo distinta a fines de los sesenta y en los setenta. A finales de los sesenta, después de un breve debate en el interior de círculos políticos de Estados Unidos sobre si promover o no una leve reforma fiscal en Guatemala, Washington abandonó completamente cualquier intento de una política reformista para Guatemala. De allí en adelante, promovió una reforma de “desarrollo” en Guatemala, planeada para pacificar y estabilizar el país *sin* hacer ninguna reforma básica, sin redistribuir de ninguna manera los ingresos a la clase trabajadora o a los pobres.

Los dos objetivos fundamentales de Estados Unidos siguen siendo lo que siempre han sido: contención del movimiento revolucionario y mantenimiento de Guatemala como reserva para inversiones extranjeras. En el cambiante pabello de Guatemala en la división internacional del trabajo, esto significó el fomento de un nuevo conjunto de actividades “productivas”, orientadas hacia la producción mercantil mundial: agroempresas, exportaciones no-tradicionales, turismo y minería extractiva. A mediados de los setenta, se descubrieron en Guatemala importantes depósitos de níquel y petróleo, los cuales aumentaron mucho la importancia estratégica del país para Estados Unidos.

Estas nuevas panaceas, que tenían que resolver los problemas de la balanza de pagos de Guatemala. Desatar un crecimiento económico y proporcionar nuevas fuentes de empleo, de hecho han aportado rápidas ganancias a un pequeño grupo de inversionistas guatemaltecos y casi ningún beneficio al resto de la población. Los indicadores básicos de pobreza, desempleo e inflación empeoran en lugar de

mejorar. En Guatemala y en toda Centroamérica, la austeridad institucionalizada proporciona la base material para el crecimiento de organizaciones políticas revolucionarias, con una base creciente en la clase obrera y en las poblaciones marginales de las ciudades y el campo.

RESISTENCIA Y CONTRAINSURGENCIA

La lucha monumental en Nicaragua que condujo al triunfo del Frente Sandinista en julio de 1979 y las luchas en curso en El Salvador y Guatemala en la actualidad, son el resultado de siglos de explotación y opresión, y de varias décadas de organización activa para resistir estas condiciones. Esbozaremos brevemente del desarrollo de estos movimientos en los sesenta y setenta, como un antecedente para comprender su necesidad hoy día.

En cierto sentido, la historia de estos movimientos empieza en los años treinta (en Nicaragua y El Salvador) y en los cuarenta y cincuenta (en Guatemala). Los levantamientos masivos en Nicaragua y El Salvador a principios de los treinta fueron reprimidos de manera tan brutal, que a ellos siguieron veinticinco años de dictadura militar, con relativamente pocas iniciativas por parte de la resistencia. En Nicaragua, la oposición burguesa a Somoza intentó suplantarlo mediante docenas de complotos, levantamientos e invasiones, así como a través de elecciones; pero ninguno de estos esfuerzos estaba bien organizado o contaba con una base de masas suficiente para tener posibilidad real de triunfar. A finales de los cincuenta, la actividad contra Somoza entre los estudiantes y el descontento en el campo dieron origen a un movimiento guerrillero, que adquirió forma organizada en 1962 con la fundación del FSLN.

A lo largo de los años y aprendiendo a partir de numerosas derrotas y errores, el FSLN desarrolló una estrategia de guerra popular prolongada, y a mediados de los setenta construyó una base suficiente como para presentar una amenaza seria al gobierno. En los últimos años antes de la victoria de 1979, el FSLN fue capaz de unirse con y dirigir a ciertos sectores de oposición burguesa contra Somoza, y –de igual importancia– de establecer una base masiva entre la clase trabajadora tanto urbana como rural así como entre los sectores marginales. Éstas fueron precondiciones necesarias para el triunfo de 1979.

En El Salvador, después del levantamiento y la masacre de 1932 y un levantamiento de breve duración en 1944, la dictadura militar gobernó de manera casi indisputada por más de treinta años. A fines de los sesenta, el movimiento obrero estalló una serie de huelgas, mientras que la oposición electoral construía su base, sólo para que se le negaran los frutos de la victoria en las elecciones de

1972. A mediados de los setenta, se formaron varias organizaciones revolucionarias y surgió un movimiento guerrillero, vinculado a organizaciones de masas con apoyo en el campesinado, trabajadores urbanos y rurales, la gran masa de desempleados y empleados marginales, estudiantes y profesores universitarios. El proceso de unificación entre estas organizaciones se completó en 1980. En ese momento el nivel de movilización popular de masas y el desafío militar por parte de la resistencia habían creado una crisis que el gobierno salvadoreño sólo podía enfrentar con la amplia ayuda económica, política y militar de Estados Unidos.

En Guatemala, la experiencia de la fracasada Revolución de 1944-54 fue crucial; como lo expresó más tarde el líder guerrillero César Montes, “una gran fuente de lecciones para nosotros y [...] un ejemplo real y viviente de lo que es la revolución”. A principios de los sesenta surgió un movimiento guerrillero socialista armado, que recurría originalmente a movilizaciones antigubernamentales de obreros y estudiantes. Para este momento estaba la futilidad de la oposición puramente político-electoral, porque *todos* los regímenes guatemaltecos desde la intervención de Estados Unidos en 1954 se mantenían en el poder gracias a Estados Unidos; tal era la lógica de la contrarrevolución institucionalizada después de 1954. Para 1966-68, el movimiento guerrillero era lo suficientemente fuerte como para requerir una mayor ofensiva contrainsurgente auspiciada por Estados Unidos, la cual logró temporalmente contener la insurrección, mediante una represión en gran escala contra las guerrillas y contra sectores enteros de la población.

Recuperándose de su derrota a fines de los sesenta, el movimiento guerrillero guatemalteco extendió grandemente su base de masas en los setenta y se unió con organizaciones del movimiento obrero. La particularidad de la lucha guatemalteca consiste en que, desde 1954, el país no ha gozado en ningún momento de una verdadera “apertura democrática”; la posibilidad de una solución democrática burguesa no ha existido desde el derrocamiento de la Revolución democrática burguesa y la represión ha sido implacable. Los organizadores de la resistencia guatemalteca no dudaron nunca que su lucha sería prolongada. Pero actualmente es claro que a un movimiento y a un pueblo que se han organizado en la clandestinidad y que han sobrevivido el nivel de la represión practicada en Guatemala no los puede extinguir *ningún* recurso planeado por Estados Unidos.

La rapidez un tanto asombrosa con la que estos tres movimientos revolucionarios en el “patio trasero” de Estados Unidos han pasado al primer plano de la lucha mundial a fines de los setenta es un resultado directo de las condiciones económicas materiales creadas por las estrategias económicas promovidas por Estados Unidos. La industrialización dependiente de los sesenta y las estrategias de

mano de obra barata de los setenta por resultado una *proletarización* creciente de la población centroamericana. Especialmente, con las estrategias de los setenta, *basadas* en la maximización de la acumulación de capital mediante la subvaluación de la fuerza de trabajo (esto es, salarios menores de los requeridos para producir y reproducir la fuerza de trabajo), la dirección de la sociedad e su conjunto no es hacia el progreso social sino hacia una explotación todavía más intensa de aquellos que ocupan los pocos empleos disponibles, y la pauperización absoluta de amplios segmentos de la población.

Estas condiciones materiales contribuyen de manera significativa al desarrollo de la organización revolucionaria en Centroamérica. A principios de los sesenta –ante del comienzo de la crisis capitalista internacional, la época del capitalismo austero y el deterioro del poder mundial estadounidense- Estados Unidos tuvo su última oportunidad de experimentar con una opción seriamente reformista e Centroamérica. Pero el rechazo de la clase dominante estadounidense a llevar adelante cualquier reforma real en ese momento, y el subsiguiente giro hacia una imposición abiertamente antirreformista del capitalismo austero en la región, cerraron esa opción de manera permanente. Para ese momento, también, los cambios estructurales en la economía mundial capitalista determinaron el desarrollo de Centroamérica esencialmente como un refugio de mano de obra barata.

Las consecuencias políticas de lo anterior son claras. En primer lugar, a pesar de que ninguno de los movimientos guerrilleros de los sesenta consiguió una base suficiente entre la población, ni suficiente fuerza militar para amenazar seriamente a los regímenes existentes, su misma existencia y crecimiento eran una evidencia del hecho de que las condiciones sociales básicas no habían cambiado desde las así llamadas “reformas” promovidas por Estados Unidos y sus aliados en la burguesía local. El crecimiento de estos movimientos fue un presagio del futuro en Centroamérica. Por esta razón, incluso durante el periodo de las “reformas económicas” Estados Unidos se concentró por igual en esfuerzos contrainsurgentes.

En segundo lugar, lo que empezó en los sesenta como movimientos guerrilleros basados en gran parte en sectores radicalizados de la pequeña burguesía, cambió profundamente en los setenta, cuando los efectos sociales estructurales del severo capitalismo austero se extendieron más, y cuando las organizaciones revolucionarias analizaron su base de clase en los sesenta. Estos factores fueron determinantes para permitirle reorganizarse en los setenta, con una base mucho más amplia en la clase obrera, arraigadas en sectores de la población que literalmente no tienen nada que perder y un mundo por ganar a partir del cambio revolucionario. Éstas, por lo tanto, y no una conspiración comunista de

ningún tipo, son las bases de las luchas que estamos presenciando hoy en Centroamérica.

EL PERIODO ACTUAL Y LAS PERSPECTIVAS FUTURAS

No menos significativo que la crisis capitalista internacional y la generalización de la política de austeridad es el deterioro de la hegemonía internacional de Estados Unidos, en particular desde su derrota en Vietnam. Este deterioro significa, primero, la intensificación de la competencia interimperialista entre Estados Unidos y los otros poderes capitalistas occidentales. Una fracción de la clase dominante estadounidense, que es transnacional en sus intereses y orientación, intenta mantener unida la “alianza occidental”, por ejemplo a través de la Comisión Trilateral. Con el tiempo, sin embargo, la alianza Trilateral ha sido expuesta a crecientes tensiones, pues la clase dominante estadounidense es menos capaz de coordinar los intereses capitalistas internacionales o de mantener la hegemonía sobre sus contrapartes en Europa occidental y Japón. Estados Unidos ha sido incapaz de detener la erosión del pacto de la OTAN y el surgimiento de la realineación económica y política de Europa oriental y la Unión Soviética.

En segundo lugar, el desafío directo de la intensificada resistencia al poder mundial de Estados Unidos en el Tercer Mundo. Estados Unidos salió de la guerra de Vietnam desgastado, aislado y derrotado. Con todo, la posibilidad de “más Vietnams” existía en muchas partes del mundo, incluyendo a Centroamérica.

El deterioro internacional significa que la clase dominante estadounidense ya no tiene el poder para establecer los términos de sus relaciones con otros países de manera unilateral. Sus opciones son más limitadas, y es menos capaz de imponer su voluntad de manera irrestricta sobre otras naciones a través de intervenciones militares instantáneas, como lo hizo, por ejemplo, en Guatemala en 1954, en el Congo en 1961, en la República Dominicana en 1965. En general, Estados Unidos tiene que negociar sus posiciones y en muchas partes del mundo ha tenido que hacer concesiones. Sin embargo, por cuanto la clase dominante estadounidense siempre ha visto a Latinoamérica como su esfera natural de dominación, la respuesta a las derrotas en otros lugares consistió en un esfuerzo intensificado por mantener la hegemonía estadounidense en este hemisferio. El derrocamiento brutal del gobierno de Allende en 1973 fue sólo el ejemplo extremo.

Con la derrota de Estados Unidos en Vietnam, con la falta de apoyo interno para intervenciones en el extranjero y con un creciente aislamiento internacional, la clase dominante estadounidense tuvo que

hacer ciertos ajustes en su política exterior. Tácticamente, con el fin de recuperar el prestigio perdido interna e internacionalmente y con el fin de reconstruir su capacidad de *largo alcance* para la intervención en el Tercer Mundo, Estados Unidos tuvo que proyectar una política de corto alcance de no-intervención y distensión con la unión soviética.

La política de distensión efectivamente creó, por un corto tiempo, un clima internacional menos peligroso en términos de la relación con la Unión Soviética y más favorable a las luchas de los pueblos oprimidos del Tercer Mundo. Podríamos decir que en cierto sentido el pueblo nicaragüense se benefició indirectamente de esta apertura; obtuvo su triunfo en un momento en que Estados Unidos no podía intervenir directa y militarmente para detener el derrocamiento de Somoza.

Sin embargo, aun durante los últimos años de la distensión, comenzando en 1976, Carter/Brzezinski prosiguieron la ofensiva en contra de la Unión Soviética al criticar las “violaciones de los derechos humanos” allá. Pero no podían exigir “derechos humanos” en la Unión Soviética sin hacer gala de su defensa en otras partes; de ahí la “política de los derechos humanos” de Carter en América Latina. De hecho, esto no representó ningún compromiso real con los derechos humanos; eran sólo un ajuste táctico a las nuevas realidades del mundo y una plataforma para atacar a la Unión Soviética. Además, la naturaleza efímera de la “apertura” en la situación internacional y el hecho de que la política pro-distensión y antintervencionista siempre fue táctica más bien que una política estadounidense de largo alcance, se aclara con la política crecientemente provocativa de Estados Unidos hacia la Unión Soviética desde mediados de 1979. Las provocaciones estadounidenses a la Unión Soviética en 1979-80 (en Cuba, en Europa occidental postergando el Tratado SALT II, la alianza antisoviética con la República Popular de China, etcétera) montaron el escenario para la intervención soviética en Afganistán y dieron a Carter una nueva excusa para una apolítica antisoviética.

De este modo, la política exterior de Carter en 1979-80 lanzó al mundo de una época de distensión a una de guerra fría, a una época de creciente inestabilidad, impredecibilidad y de inminente riesgo bélico. La “doctrina Carter” reflejaba el deseo del gobierno estadounidense de emprender una ofensiva antisoviética y de afirmar el poder estadounidense, *precisamente en el momento en que el poder mundial real de Estados Unidos se deterioraba.*

En esta situación general, la administración Carter se vio obligada a responder a la revolución de Nicaragua en 1979, una vez que el Frente Sandinista había tomado el poder. Esto dio lugar a un serio debate en el interior de la clase dominante estadounidense sobre si se extendía o no ayuda al nuevo gobierno nicaragüense para la reconstrucción de su economía devastada.

En el interior de la clase dominante estadounidense, el debate sobre la ayuda a Nicaragua opuso a los trilateralistas (representantes del capital monopólico/banquero transnacional) contra los militaristas de derecha (representantes del capital industrial competitivo, por ejemplo, el complejo militar-industrial). Éste era un drama de la nueva guerra fría, parte de un debate más amplio: cómo debería Estados Unidos ejercer su poder declinante en el mundo de hoy –seguir pretendiendo que reejerce un poder unilateral o hacer ciertos ajustes pragmáticos a la realidad de su poder desgastado- y cómo proseguir con una postura intervencionista de guerra fría en el hemisferio.

Los banqueros transnacionales salieron airosos temporalmente, bajo Carter con la decisión de extender una ayuda estadounidense de 75 millones de dólares al gobierno sandinista. Argumentaron desde el principio que ésta era la única manera de excluir a Nicaragua del campo socialista y de asegurar el reembolso nicaragüense de la deuda exterior de 1 600 millones de dólares dejada Somoza (adeudada principalmente a bancos privados con sede en Estados Unidos). El efecto de largo alcance consistiría en forzar a Nicaragua a la situación intolerable de pedir austeridad al pueblo mientras se pagaban las deudas acumuladas por Somoza. Se trata, en efecto, de una estrategia política de más largo alcance para desestabilizar la revolución nicaragüense (en contraste con las propuestas de intervención más inmediatas de los militaristas de derecha, ayudando directamente a los grupos exiliados somocistas, negando toda ayuda estadounidense, etcétera).

En los últimos meses de la administración Carter, el avance del movimiento revolucionario en El Salvador presentó al gobierno estadounidense el desafío más serio desde Vietnam. Tanto la administración saliente de Carter como el equipo entrante de Reagan plantearon la intervención militar como una opción que no podía descartarse.

La plataforma del Partido Republicano adoptó en el verano de 1980 una oposición expresa a la ayuda para Nicaragua y apoyo a los grupos de exiliados que tramaban derrocar el gobierno sandinista. Posteriormente, mientras que algunos consejeros de Reagan aseguraban que “no habría cambios bruscos en la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica”, otros afirmaban que el modelo para Centroamérica sería la política estadounidense hacia Grecia al final de la segunda guerra mundial, esto es, el renacimiento de la doctrina Truman. Mientras mantiene abierta la opción de una intervención directa o del uso de fuerza para “objetivos estratégicos limitados”, la administración Reagan se ha concentrado en una ayuda económica y militar masiva, al asilo de la doctrina Truman, incluyendo el envío de consejeros militares. (Esto podría combinarse con el uso de sustitutos de las tropas estadounidenses, incluyendo ex- Guardias Nacionales de Nicaragua, exiliados cubanos y mercenarios.)

El futuro desarrollo de la política estadounidense dependerá, hasta cierto punto, del resultado de las intrigas por el poder en el interior del gobierno de Reagan. Por parte, es evidente que la Comisión Trilateral, que fue una fuerza dominante en la definición de la política de Carter, intenta desempeñar un papel activo en la administración Reagan (por ejemplo, a través del vicepresidente trilateralista George Bush). Por otra parte, la mayoría de los consejos de política exterior de Reagan provienen de grupos intelectuales de derecha, o son militares superhalcones, o ex-oficiales de las administraciones Nixon/Ford a la derecha de Kissinger (por ejemplo, el secretario de Estado Haig).

Aun dada esta pugna de fuerzas, no hay duda de que la posición de Reagan será intervencionista en uno u otro sentido. Sin embargo, la voluntad de intervenir debe corresponderse con una capacidad objetiva de hacerlo; a este respecto, debe operar dentro de ciertas realidades:

a) Como se vio más arriba, desde la derrota en Vietnam, Estados Unidos ya no domina el mundo capitalista como lo hizo alguna vez y ya no es capaz de imponer su voluntad mediante acciones unilaterales. Además, a pesar de la intensa presión estadounidense, la mayoría de los “aliados” europeos no aprueba la política estadounidense en Centroamérica. El gobierno socialdemócrata de Bonn, por ejemplo, apoyó al FSLN en Nicaragua y el Frente Democrático Revolucionario en El Salvador. Los movimientos internacionales tanto socialdemócrata como democristiano ejercen un papel activo en Centroamérica (aunque no siempre del mismo lado). Además, ciertos gobiernos latinoamericanos como los de México y Brasil persiguen sus propios intereses y políticas en Centroamérica. La perspectiva de tener que actuar al margen de muchos de los “aliados” estadounidenses, podría limitar seriamente lo que puede hacer la administración Reagan.

b) La política aventurera de derecha por parte de Estados Unidos puede provocar un papel más activo de Cuba o incluso de la Unión Soviética en apoyo de los movimientos revolucionarios, con el riesgo de un enfrentamiento más amplio en Centroamérica. Indudablemente, si la administración Reagan se guiara por sus amenazas verbales de un bloque naval contra Cuba (para “castigarla” por el supuesto suministro de armas a las guerrillas salvadoreñas), el conflicto se internacionalizaría. O, de manera alternativa, un movimiento abiertamente agresivo de Estados Unidos en Centroamérica (y/o contra Cuba) podría recibir una respuesta soviética en otras partes del mundo. El mundo ha cambiado mucho desde los treinta. Estados Unidos ya no está en una posición de absoluta hegemonía, por lo que ya no puede advertirle a la Unión Soviética que no intervenga en Polonia y, de manera simultánea, intervenir directa y militarmente en Centroamérica. *Hoy día, Centroamérica ya no es simplemente el patio trasero de Estados Unidos;* las luchas allí y cualquier respuesta estadounidense tienen

implicaciones globales, que limitan la absoluta libertad de acción del gobierno de Estados Unidos.

c] Éste es un periodo de crisis en las economías nacionales de los principales países capitalistas, de modo notable la de Estados Unidos. Ciertamente, la “solución” más fácil para la clase dominante estadounidense es transferir esta crisis a su clase obrera; de ahí la política de austeridad, muy intensificada bajo Reagan. Aun así, al mismo tiempo, Reagan pide un presupuesto de defensa ampliamente acrecentado; y ciertamente, cualquier actividad intervencionista en Latinoamérica sería costosa, puesto que las luchas revolucionarias allí están demasiado adelantadas como para ser contenidas sin un esfuerzo importante estadounidense. Por tanto, no puede emprenderse ninguna intervención mayor en el extranjero sin la consideración de las consecuencias internas.

d] También en Estados Unidos hay un sentimiento creciente de oposición a la intervención en Centroamérica. De hecho, sólo el 26% del electorado americano votó por Reagan en las elecciones de noviembre de 1980; y desde ese 26%, muchos votos eran más bien de protesta por los fracasos de Carter que votos por la política represiva, anticlase obrera en el interior o por la intervención en el extranjero. Además, desde mediados de 1979, las encuestas han demostrado de manera consistente que dos tercios del pueblo norteamericano se oponen a la intervención estadounidense en el extranjero, particularmente en Centroamérica.

Un factor adicional es el creciente compromiso de la Iglesia (especialmente la Iglesia católica) en actividades no-intervencionistas, relacionado con la creciente y sanguinaria persecución contra curas y funcionarios eclesiásticos simpatizantes de la izquierda en Guatemala y El Salvador; tal presión podría pesar fuertemente sobre Reagan, quien obtuvo una numerosa votación católica. Finalmente, algunos sindicatos internacionales y estadounidenses han organizado importantes campañas a favor de los derechos humanos y boicots en contra de los gobiernos salvadoreños y guatemalteco. Si bien todo esto no es sino el comienzo, y aunque puede esperarse que los principales medios e comunicación masiva apoyarán cualquier cosa que haga Reagan, con todo, estas corrientes en la opinión pública estadounidense representan una ampliación importante del movimiento tradicional antintervencionista y a favor de la paz, así como una creciente participación de la clase obrera en ese movimiento.

Dadas estas limitaciones, un desembarco de *marines* en Centroamérica no es, quizás, el recurso más idóneo. Aun así, las otras opciones que le quedan al gobierno de Estados Unidos son todavía numerosas e igualmente peligrosas (por ejemplo, un enfoque al estilo de la doctrina Truman). En ciertos aspectos, las opciones abiertas para la administración Reagan son similares a las enfrentadas por Carter. Disidentes en el aparato de la política exterior de Carter argumentaron en noviembre de

1980 que:

Si el presidente Reagan elige utilizar la fuerza militar en El Salvador, los historiadores podrán mostrar que en el último año del gobierno Carter se preparó el marco para tales acciones [...] (“Dissent Paper on El Salvador and Central América”, DOS, 6 de noviembre de 1980, p. 10).

El gobierno de Carter decidió vivir con la revolución nicaragüense, una vez que ésta era un *fait accompli* (si bien Estados Unidos apoyó a Somoza hasta que literalmente ya no podía hacerlo), pero estaba decidido a toda costa a impedir la repetición de esta revolución en otra parte de Centroamérica. Los funcionarios de Carter dejaron abierta la “posibilidad” de una intervención directa en la región y, según el “Dissent Paper”, varias agencias se estaban preparando para la intervención. En tanto que expresaba protestas contra las “violaciones de los derechos humanos” en Guatemala y El Salvador, la administración Carter realmente nunca dejó de apoyar a ambos gobiernos, ni tomó ninguna medida efectiva para detener las campañas de asesinatos de los gobiernos derechistas en ambos países. Cada vez más en 1980, la “seguridad” tuvo prioridad sobre los derechos humanos como factor determinante de la política estadounidense.

En el contexto de la nueva política global de guerra fría, la política centroamericana de Carter era contradictoria e hipócrita. Sin embargo, la contradicción moderó efectivamente las acciones estadounidenses. Bajo Carter/Brzezinski, la política de los “derechos humanos” se proyectó originalmente como un garrote para utilizarse contra la Unión Soviética; pero la opinión internacional le devolvió esta arma diplomática a sus inventores, forzando a Carter a criticar a los “violadores de los derechos humanos” como Somoza, en la esfera de influencia estadounidense. En suma, la retórica de los derechos humanos se convirtió en cierto modo en una traba para la política de seguridad hemisférica. *Es una traba que no constriñe al gobierno de Reagan*, y ésta es la razón por la que el grupo de Reagan se empeñó desde un principio en denunciar la política de los derechos humanos de Carter. Si bien la proclamación de Carter de dicha política era hipócrita, su abandono por Reagan es virtualmente una licencia para el terror de derecha.

Más allá de las políticas coyunturales de los dos gobiernos, los movimientos revolucionarios en El Salvador y Guatemala representan problemas de mayor alcance para toda la clase dominante estadounidense; problemas que la revolución nicaragüense *no* planteó. En primer término, la dictadura somocista en cierto modo se consideraba como una vergüenza para el gobierno Carter, y por tanto

había razones para deshacerse de ella; en contraste, el enfoque estadounidense en El Salvador (en ausencia de un Somoza con enemigos entre la clase *local*) ha sido el de hacer aparecer la junta como respetable.

En segundo lugar, las luchas revolucionarias en El Salvador y Guatemala tienen una base y una dirección obrera mucho más clara de lo que era el caso Nicaragua; su orientación política es más claramente socialista; los blancos de sus movimientos no son una dinastía gobernante, sino virtualmente la totalidad de la clase capitalista de Guatemala y El Salvador. Además, las mismas presiones de las condiciones sociales (desempleo masivo y pobreza) casi forzarían a los gobiernos revolucionarios en estos países a avanzar más rápidamente hacia estructuras socialistas.

En tercer lugar, una cosa era para la clase dominante estadounidense (al menos para un ala) aceptar como un *fait accompli* una revolución aislada en Nicaragua, que podían intentar controlar y manipular a través de créditos de ayuda exterior, préstamos bancarios y deudas. Pero es muy diferente la perspectiva de un bloque revolucionario en Centroamérica (y el Caribe/Cuba), incluyendo Guatemala, el país más importante estratégica y económicamente para Estados Unidos y el capital transnacional (con inversiones extranjeras considerables en petróleo, níquel, industria, etcétera). Si bien la “teoría de dominio” es absurda en situaciones donde no existen condiciones internas para la revolución, tales condiciones *sí* existen en El Salvador y Guatemala actualmente, y ningún sector de la clase dominante estadounidense está dispuesto a “perder” Guatemala. Esta es la realidad que subyace en las declaraciones vehementes de todos los sectores de la clase dominante estadounidense sobre “poner un límite” en El Salvador.

Ninguna de las consideraciones anteriores significa necesariamente que la clase dominante estadounidense pretende, a largo plazo, dejar en paz a Nicaragua; en realidad, muy bien podría ser la revolución nicaragüense el blanco último de la intervención al estilo de la doctrina Truman en El Salvador y Guatemala. En un sentido muy real, la relativa unidad de la clase dominante estadounidense alrededor de algún tipo de postura intervencionista en Centroamérica cambia las condiciones que hicieron posible el triunfo sandinista.

Haciendo una consideración de mayor alcance, podemos plantear los dilemas enfrentados tanto por el gobierno estadounidense y el capital transnacional, como por los movimientos revolucionarios en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Por una parte, las fuerzas del capital están obligadas internacional e internamente a no desatar su furia más directa en contra del pueblo centroamericano (suponiendo algún grado de racionalidad aun en el interior del gobierno Reagan). Una solución del

tipo de la doctrina Truman, o incluso una intervención estilo *marine*, podría descargar una destrucción espantosa en Centroamérica durante el intento de eliminar físicamente al “enemigo interno”, esto es, el movimiento de masas (como ocurrió en Guatemala en 1954); pero ninguna de las dos puede realmente aplastar los movimientos allí. Ya es demasiado tarde. En verdad no hay manera de que Estados Unidos pueda “ganar” en Centroamérica a estas alturas, al menos literalmente destruir poblaciones enteras.

Por otra parte, los movimientos centroamericanos enfrentan igualmente serias contradicciones. La revolución nicaragüense está fuera del alcance del imperialismo *estadunidense*, pero de ningún modo fuera de la mira del capital *transnacional*. En realidad, al igual que Polonia y otros países socialistas, Nicaragua sigue siendo vulnerable a través de sus deudas, y esto constituye un verdadero obstáculo para cualquier transición al socialismo. Además, en el caso de que los movimientos revolucionarios en El Salvador o Guatemala tomaran el poder estatal, enfrentarían algunos de estos mismos obstáculos. Por ejemplo, si un movimiento revolucionario en cualquiera de los dos países tomara las medidas más básicas para elevar los salarios de la clase obrera, inmediatamente estaría desafiando al capital transnacional, que ha utilizado al país como un refugio de mano de obra barata.

Por lo tanto, ambos lados de esta lucha internacional de clases están limitados por la creciente transnacionalización del mundo. Podría decirse incluso que la presente estructura de la economía mundial capitalista favorece las luchas de liberación nacional, en el sentido de que el capital transnacional no está *necesariamente* atado a los intereses inmediatos del gobierno estadounidense y de que éste ya no tiene la libertad absoluta que una vez tuvo. Pero el tremendo poder del capital transnacional intensifica mucho las contradicciones de una construcción socialista para los países recientemente liberados y esto afectará el destino de las luchas populares en Centroamérica.

Una última consecuencia de lo anterior es la creciente interrelación entre el desarrollo del movimiento obrero en Estados Unidos y las luchas en Centroamérica. La reestructuración de la economía mundial capitalista y la pérdida de poder de Estados Unidos en el mundo introducen una época de capitalismo austero para la clase obrera estadounidense, que aniquila para el futuro previsible cualquier mito de que esta clase en cierto modo se “beneficia” de la superexplotación continua de los trabajadores centroamericanos. Además, en esta época post-Vietnam, es claro que la inmensa mayoría de la clase obrera norteamericana no apoya la política agresiva estadounidense ni siquiera en nombre de “contener el comunismo”. El así llamado “consenso de guerra fría” ha sido destrozado. Por esta razón, el gobierno Reagan enfrenta, incluso ahora, *antes* de la escalada de la injerencia estadounidense directa en El Salvador, un movimiento antintervencionista importante y creciente en Estados Unidos.

En respuesta a este movimiento, el gobierno Reagan desarrolla una ofensiva contra los oponentes en Estados Unidos al militarismo y a la intervención en el extranjero. El renacimiento de la cacería de brujas macartista contra las instituciones liberales de izquierda y del movimiento obrero es una clara respuesta del grupo de Reagan y del ala derecha del congreso a la amenaza de un movimiento pacifista de base amplia, esto es, un intento por resucitar el anticomunismo ideológico con el fin de preparar el terreno para el apoyo de dictaduras derechistas y la intervención estadounidense en el extranjero. En el mejor de los casos, podemos esperar una operación similar a la campaña masiva de espionaje interno (en gran parte ilegal) planeada por Nixon durante la guerra de Vietnam. En el peor de ellos, cualquier decisión estadounidense de intervenir directa o militarmente en Centroamérica requeriría de una represión más extendida en Estados Unidos, de un renacimiento del macartismo.

El fantasma de la represión contra el movimiento antintervencionista en Estados Unidos es tanto más real *porque* las perspectivas de detener una intervención salvaje de Estados Unidos (ya sea directa o al estilo de la doctrina Truman) dependerán en gran medida del pueblo norteamericano. De mayor alcance también, las perspectivas de la construcción del socialismo en Centroamérica dependerán de manera significativa del desarrollo del movimiento de la clase obrera en Estados Unidos, capaz de destruir en su núcleo al sistema capitalista y destronar *todas* las fracciones de la clase dominante estadounidense, “interna” y transnacional. Como dice Ruy Mario Marini:

Es por esta razón que, junto con las fuerzas de liberación en marcha en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y levantándose a lo largo y ancho de Latinoamérica, la palabra la tiene el pueblo norteamericano y las fuerzas que mejor pueden expresar sus intereses históricos (“The Nicaraguan Revolution and the Central American Revolutionary Process”, en *Contemporary Marxism*, n. 3, verano de 1981, San Francisco, Synthex Press).

Existen las condiciones para una amplia coalición o movimiento progresista que se oponga a la intervención estadounidense en Centroamérica; pero quizás esto lo entienda más rápida y claramente el gobierno de Reagan que muchos sectores de la izquierda estadounidense. Por ello, os centroamericanos tienen razón para estar preocupados de que no sea liquidado este movimiento e pañales en el corazón del imperio. Por esta razón también, todos los norteamericanos progresistas tienen motivo para aprender bien una de las lecciones de la guerra fría de finales de los cuarenta y de los cincuenta: que el anticomunismo ideológico sigue siendo un arma poderosa que la clase dominante puede utilizar para

destruir el movimiento antintervencionista *internamente*; y que si los antimperialistas no logran combatir el anticomunismo en sus filas, se aíslan de las organizaciones de la clase obrera e imposibilitan esencialmente una oposición efectiva a la intervención en el extranjero. Además, prepararían el terreno para un ataque de costado contra todos los movimientos progresistas, como consecuencia directa de no lograr combatir la represión contra las organizaciones de la clase obrera.

En el punto culminante de la época macartista, lo que dio carta blanca al imperialismo estadounidense para intervenir en Guatemala en 1954, fue la ausencia de un movimiento antimperialista fuerte vinculado con el movimiento obrero. Lo que fue crucial para eventualmente expulsar a Estados Unidos de Vietnam fue el crecimiento de un amplio movimiento progresista antintervencionista. Y es el renacimiento de tal movimiento, el cual en virtud de la crisis económica podría contar hoy con una participación y orientación obrera mucho más amplia, el que puede frenar los propósitos del gobierno Reagan de aplastar las luchas populares en El Salvador, Guatemala y otras partes del Tercer Mundo.

[Tomado de *Contemporary Marxism*, n. 3, San Francisco, 1981.

Traducción de Corina Yturbe]

NOTA SOBRE LAS FUENTES

No hemos incluido referencias detalladas. Las principales fuentes utilizadas (que pueden ser consultadas por los lectores interesados) incluyen lo siguiente:

1. Sobre la historia de la injerencia estadounidense en Centroamérica, los siguientes trabajos de Susanne Jonas: “Revolution (1944-54) and Counterrevolution (1954-74)” en Sección III de *Guatemala*, eds. Susanne Jonas and David Tobis, Berkeley, NACLA, 1974.
“Test Case for the Hemisphere: U.S. Strategy in Guatemala, 1950-1974”, Ph. D. dissertation: Department of Policital Science, U. C. Berkeley, 1974.
“Guatemala” capítulo en *Latin America: The Struggle With Dependency and Beyond*, eds. Ronald Chilcote and Joel Edelstein, Schenkman, Cambridge, 1974.
“Nicaragua”, en *NACLA's Latin American and Empire Report*, febrero de 1976.
“Central America as a Source of Cheap Labor for Internacional Capital”, mimeo, San Francisco, Institute for the Study of Labor and Economic Crisis, 1979.
“Reagan y Guatemala”, *Cuadernos de Marcha*, México, noviembre-diciembre de 1980.

2. Para una interpretación más amplia, los siguientes artículos de Marlene Dixon:

“An Outline of Working Class History, 1917-1979”, en *Our Socialism*, Theoretical Journal of the Democratic Workers Party, 2, 2, 1º de mayo de 1981.

“Rethinking 50 Years of American History: From Roosevelt to Reagan”, en *Plain Speaking*, News Journal of the Democratic Workert Party, n. 5, 7 y 5, 8, 15-31 de junio de 1981.

“Responsibilities of the U. S. Working Class to Latin American Revolutionary Movements in a New Cold War Period”, en *Contemporary Marxism*, n. 1, “Strategies for the Class Struggle in Latin America”, primavera de 1980.

Susanne Jonas y Marlene Dixon: “Proletarianization and Class Aliances in the Americas”, en *Contradictions of Socialist Construction*, Synthesis Publications, San Francisco, 1980.